

Santiago, diecisiete de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

En causa RUC N° 2001105864-8, RIT N° 57-2021 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, por sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se condenó a los acusados **Santiago Alan González Guerra y Patricio Antonio Román Peña**, en calidad de coautores del delito frustrado de robo con violencia, perpetrado el día 31 de octubre de 2020, en la comuna de Padre Hurtado, a sufrir cada uno de ellos la pena cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales y costas, sanción corporal de cumplimiento efectivo.

En contra de esa decisión la defensa común de ambos acusados interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada el día diecinueve de mayo último, disponiéndose *-luego de la vista-* la notificación del presente fallo vía correo electrónico a los intervinientes, según consta del acta levantada en su oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de nulidad deducido en autos por la defensa de los acusados se funda, en primer término, en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en los artículos 19 N° 3 inciso sexto y 19 N° 7 letras b) y c) de la Constitución Política de la República; 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 174, 181, 205, 216 y 228 del Código Procesal Penal, en cuanto el impugnante estima vulnerado su derechos al debido proceso.



Expone que los policías efectuaron una entrada y registro en búsqueda de sus representados al inmueble ubicado en calle Los Silos N°353, comuna de Padre Hurtado, en virtud de una supuesta flagrancia, sin dejar ningún tipo de registro de haber solicitado autorización verbal del propietario o encargado de dicha vivienda, pese a que dicha diligencia *-al conducir a la comprobación del hecho punible-* debía ser consignada con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación, pues así lo exigen expresamente los artículos 174, 181, 205 y 228 del Código Procesal Penal.

Finaliza solicitando se invalide tanto el juicio oral como la sentencia condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral ante tribunal no inhabilitado al efecto, excluyéndose del auto de apertura la declaración del testigo Carlos Meliñan Melinao.

SEGUNDO: Que los hechos que se han tenido por establecidos por los sentenciadores del grado, en el motivo octavo de la sentencia que se impugna, son los siguientes:

“Que el día 31 de Octubre de 2020, alrededor de las 05:20 horas, mientras la persona de iniciales O.E.G.G., caminaba por Avenida Los Silos en dirección a Camino Melipilla, al llegar a calle Río Itata, de la comuna de Padre Hurtado, es abordada por Santiago Alan González Guerra y Patricio Antonio Román Peña, quienes impiden su paso y lo amenazan diciéndole “entrégame la mochila chuche tu madre”, especie que la víctima llevaba en su espalda, la cual contenía elementos de trabajo y personales, mientras le propinaban golpes de puño en distintas parte del cuerpo, uno de los sujetos le propinó una punzada con un arma corto punzante en el sector del glúteo izquierdo, O.E.G.G. logra huir con su mochila en dirección a su domicilio, llamando a Carabineros, quienes detienen a



los sujetos, en el interior del domicilio ubicado en Avenida Los Silos 373, comuna de Padre Hurtado. Producto de la agresión O.E.G.G. resultó con herida punzo penetrante de 2 cm., de diámetro en cara lateral externa de glúteo izquierdo, de carácter leve según dato de atención de urgencia respectivo” (sic).

TERCERO: Que, es menester señalar que en el considerando duodécimo del fallo impugnado, los juzgadores del grado tuvieron presente para desestimar la alegación levantada por la defensa relativa a la ausencia de autorización del propietario o encargado para ingresar al domicilio en el que fueron detenidos los encartados, además de la falta de registro de dicha actuación, los siguientes fundamentos:

“(…) no obstante advertir algunas posibles falencias u omisiones en relación a la falta de registro de la entrada voluntaria al domicilio en que se encontraban los acusados, esto es, Los Silos N° 353 de la comuna de Padre Hurtado, al indicar el Cabo Primero de Carabineros Carlos Meliñan, que no hay registro de la autorización que otorgó la señora con la cual se entrevistaron, la que se ejecutó de manera verbal, lo cual no implica que no se haya realizado, el funcionario menciona, al igual que la víctima la manera como se requirió la autorización a la persona que los atendió al llamar al domicilio, haciendo presente el afectado que se bajó del carro policial, que fue observado por la mujer en los momentos en que los Carabineros le hacían saber lo acontecido momentos antes, y la sindicación que efectúa la víctima en cuanto a que sus agresores habían ingresado a su domicilio, siendo en dicho contexto, que se verifica el ingreso a la propiedad, efectuando Carabineros una revisión, alumbrando con linternas, dando con el paradero de ambos sujetos que O.E.G.G., quienes fueron sindicados in situ, cómo los sujetos que momentos antes habían intentado sustraer especies de propiedad de la víctima, arremetiendo en su contra con golpes de pie y puño en distintas



partes de su cuerpo y un puntazo en su glúteo izquierdo. A mayor abundamiento, no hay prueba que contradiga la autorización voluntaria al domicilio de uno de los acusados, aun cuando el Tribunal estima que frente a los antecedentes que la víctima Carabineros acerca del paradero de los sujetos que minutos antes lo habían asaltado, estaban facultados conforme a lo que establece el inciso final del artículo 129 del Código Procesal Penal, para ingresar al domicilio, entendiendo que estaban frente a un delito flagrante e iban en persecución de sus autores tras la información entregada por la víctima, esto es, que los autores del robo habían ingresado al domicilio ubicado en Los Silos N°353, comuna de Padre Hurtado. Lo anterior, permite desestimar las alegaciones de la defensa en cuanto a la ilegalidad en la detención de los acusados, como también, aquella tendiente a obtener una valoración negativa de la prueba rendida durante el juicio.

En este mismo orden de ideas, se desestima aquellas exposiciones deslizadas por la defensa – no mayormente desarrolladas, en torno a la falta de registro de la persona que requirió la presencia policial en el domicilio de la víctima, si fue la señora de la víctima, su hijo o el propio afectado, aun cuando la víctima estuvo claro en señalar que debido al nerviosismo o shock en que se encontraba, no fue quien llamó a Carabineros” (Sic).

CUARTO: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías



que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

QUINTO: Que en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efecto de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados, como denunció su defensa.

SEXTO: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (*Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019*).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la



intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 *-que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia-* así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

SÉPTIMO: Que, por su parte, el artículo 129 del Código Procesal Penal dispone en su inciso final, que en caso de flagrancia *“la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención (...)”*.



OCTAVO: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado *-y sometido a control jurisdiccional-* en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

NOVENO: Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

DÉCIMO: Que según se desprende de los hechos que se dieron por acreditados en la especie el ofendido, antes de ser abordado por los acusados, vio que éstos salieron desde el domicilio ubicado en Avenida Los Silos 373, comuna de Padre Hurtado *–incluso consignó en su declaración que meses antes había sido objeto de un ilícito de similares características, en el que el hechor habría sido el hermano de uno de los encartados, quien también vive en dicho inmueble–*, de lo que se sigue que sabía perfectamente donde éstos podían ser habidos,



motivo por el cual, apenas llegó a su morada llamó a Carabineros, quienes llegaron minutos después a la casa de la víctima, indicándoles que los autores del delito se encontraban en la dirección antes individualizada, donde precisamente fueron hallados, momentos después, por los aprehensores.

UNDÉCIMO: Que, de la lectura del inciso final del artículo 129 del Código Procesal Penal, se desprende que en caso de flagrancia la policía se encuentra facultada para ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. Es decir, en caso de encontrarse en actual persecución de quien acaba de cometer un ilícito, los agentes pueden hacer ingreso a un domicilio a fin de practicar la detención de rigor.

DUODÉCIMO: Que, dicha norma, para efectos de establecer que debe entenderse por “*actual persecución*”, debe necesariamente ser interpretada a la luz de las situaciones de flagrancia que contempla el artículo 130 del mismo cuerpo de normas, en particular -*en el caso de autos*- con la hipótesis de la letra e) de dicho precepto, que refiere que se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia “*El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato*”, circunstancia que calza a la perfección con los hechos que se dieron por establecidos en el fallo que se revisa.

En el mismo sentido, es menester señalar que el inciso final del artículo 130 del Código Procesal Penal, entiende por tiempo inmediato “*todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas*”.

DÉCIMO TERCERO: Que de la lectura de las disposiciones antes transcritas, es posible colegir que el concepto de “*actual persecución*” aludido por



el inciso final del artículo 129 del Código Procesal Penal, se encuentra en estrecha concomitancia con la expresión “tiempo inmediato” a que alude el artículo 130, inciso final, del mismo texto legal, de lo que necesariamente se sigue que la actual persecución del individuo a quien debe detenerse, debe ser entendida como aquella que se realiza dentro de las doce horas siguientes a la comisión del hecho, siempre y cuando la detención que se practique no se verifique fuera de dicho rango temporal.

DÉCIMO CUARTO: Que, en la especie, se encuentra acreditado que entre la comisión del hecho punible y la detención de los acusados, no transcurrió más de una hora, lo que descarta la ilegalidad en el proceder de los funcionarios policiales quienes, al encontrarse ante un delito flagrante y en actual persecución de los hechos del mismo, estaban plenamente facultados para ingresar al inmueble en cuyo interior éstos se encontraban *-para detenerlos-*, sin que fuere necesario ante tal escenario recabar la autorización del propietario o encargado del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y razonado, el motivo de nulidad en análisis no podrá prosperar.

DÉCIMO QUINTO: Que, como causal subsidiaria del arbitrio en análisis, se invoca aquella contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letras c) y 297 del mismo cuerpo de normas.

Expone que la sentencia cae en una contravención a la razón suficiente, en tanto primeramente la víctima señala que no se le sustrajo especie alguna por los acusados, ni siquiera su teléfono, y que pese a ello, la sentencia viene a señalar que se trataría en realidad que el testimonio de la víctima es coherente y que no tiene ningún tipo de contradicción entre sí.

Argumenta, en un segundo orden de ideas, que el fallo impugnado incurre en una contradicción evidente al considerar el testimonio del Carabinero Carlos Iván



Meliñan Melinao, primeramente para señalar que hubo omisiones en las diligencias respecto de la entrada al domicilio de Los Silos N°353, para luego -*en su considerando duodécimo*- sostener que no hay prueba que contradiga la autorización de la supuesta moradora del citado inmueble, contraviniendo el principio de no contradicción de manera flagrante.

Concluye solicitando que se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

DÉCIMO SEXTO: Que, de la sola lectura de los fundamentos de la causal en estudio, es posible colegir que a través de su reclamo lo que se pretende es revertir una calificación jurídica no compartida por la defensa, mas no la inexistencia de "*La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297*", como contempla la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, a lo que debe sumarse que en el fundamento duodécimo del fallo en revisión, los sentenciadores del grado expusieron con claridad los argumentos que los llevaron a desestimar las alegaciones desarrolladas en juicio por la defensa de los encartados, por cuanto consideraron verificada una hipótesis de flagrancia que facultó el ingreso de los funcionarios policiales al domicilio, por lo que no es posible concluir que la contradicción denunciada en el arbitrio entre el testimonio del Carabinero Meliñan y la estimación realizada por el Tribunal de instancia respecto a la autorización de ingreso al domicilio, haya influido en lo dispositivo del fallo, careciendo en consecuencia de la trascendencia necesaria para que la causal de nulidad invocada prospere.



Conforme lo antes expuesto, careciendo de sustento el motivo de nulidad en comento, éste no podrá prosperar.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al no haberse configurado ninguna de las hipótesis de nulidad invocadas por la defensa de los acusados, el arbitrio en análisis será rechazado en todos sus extremos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a); 374 literal e) y; 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa de los acusados **Santiago Alan González Guerra y Patricio Antonio Román Peña**, en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante , y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N° 2001105864-8, RIT N° 57–2021, los que, por consiguiente, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 4.865-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Sra. María Teresa Letelier R., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.





En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

